

EDITORIAL

El escándalo de las licencias falsas

“Es urgente reforzar los controles y sancionar a los responsables”.

En un país donde la salud debería ser un derecho garantizado y protegido, la reciente investigación sobre la venta de licencias médicas falsas ha destapado una red de corrupción que involucra a médicos inescrupulosos y funcionarios públicos que han abusado del sistema.

La Contraloría General de la República ha revelado que más de 25.000 empleados públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, lo que ha generado un perjuicio millonario para el Estado. La Fundación Integra y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) figuran entre las instituciones con mayor cantidad de casos detectados, con 2.280 y 1.934 licencias fraudulentas, respectivamente.

Pero el problema no se limita a los compradores de licencias. La investigación ha identificado a médicos que han emitido más de 71.000 documentos falsos entre 2020 y 2022, causando un daño al fisco superior a 26.000 millones de pesos. La facilidad con la que estas licencias eran adquiridas, incluso a través de redes sociales y WhatsApp, demuestra

la falta de control y fiscalización en el sistema.

Este escándalo no sólo afecta las arcas del Estado, sino que también socava la confianza en el sistema de salud y perjudica a quienes realmente necesitan licencias médicas legítimas. La Fiscalía ha formalizado a 82 compradores de licencias, y algunos médicos involucrados han sido expulsados del país. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿Será suficiente para erradicar esta práctica?

Es imperativo que el gobierno refuerce los mecanismos de control y sancione con severidad a los responsables. La salud no puede ser un negocio fraudulento ni una vía de escape para quienes buscan beneficios indebidos. La ciudadanía merece transparencia y justicia.

La corrupción en el sistema de licencias médicas es un reflejo de un problema más profundo: la falta de ética y el abuso de los recursos públicos. Es hora de que las autoridades actúen con firmeza y que la sociedad exija responsabilidad. Porque la salud no es un privilegio, sino un derecho que debe ser protegido.